

## EDITORIAL

### La monarquía ante la Historia

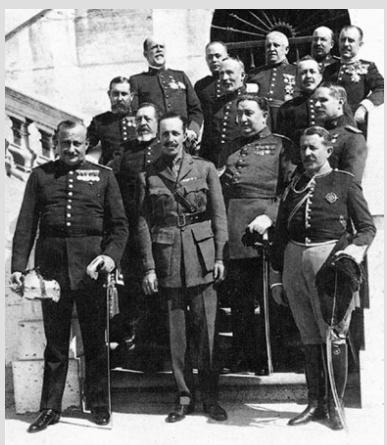
La reciente abdicación del rey Juan Carlos y la rápida sustitución en la corona por su hijo Felipe apela a nuestra responsabilidad como ciudadanos y como historiadores comprometidos con la defensa de las libertades y los principios de la igualdad y la emancipación social. En esa doble condición, no podemos por menos de subrayar que los valores de participación en la vida pública, de solidaridad y cambio social, de democratización y descentralización del Estado, de laicismo profundo, de defensa y fomento de la cultura, están asociados históricamente en nuestro país, ya desde el siglo XIX, a las ideas republicanas. La noción republicana de «pueblo» y algunos de los vectores que configuraron las más profundas tendencias de nuestro republicanismo histórico no solo no caducaron con el desarrollo de los movimientos de clase de la izquierda obrera, sino que contribuyeron finalmente a enraizarlos en una tradición más amplia y plural que, no sin contradicciones e incomprendiciones, cristalizó finalmente en la defensa heroica de las libertades aplastadas por la sublevación cívico-militar de 1936; golpe cruento que ponía fin a un esperanzador proyecto de modernización de España sobre las bases de la democracia avanzada y la justicia social.

Por el contrario, la monarquía en nuestro país ha sido siempre el régimen de las oligarquías y, cuando se vio obligada a convertirse en constitucional, lejos de la imagen de estricta imparcialidad que se le ha atribuido, actuó como garante de un sistema político que, más allá de reconocer —como no podía ser de otra manera— las libertades formales básicas, ha ido desarrollando sus tendencias más negativas y antisociales, con sus correspondientes secuelas de corrupción, hasta desembocar en crisis política actual. La república, por el contrario, y particularmente en España, más allá de sus dificultades históricas para implantarse, que también deben ser analizadas en su complejidad, es sinónimo de ciudadanía, espíritu cívico y aspiraciones igualitarias.

Pero, al margen de nuestra percepción como ciudadanos y de la pluralidad de opiniones que los integrantes del colectivo de historiadores de la FIM podamos albergar sobre el futuro político inmediato de nuestro país, el cambio de una a otra testa coronada es una buena ocasión para recordar nuestro papel en la reconstrucción de una narrativa histórica crítica y rigurosa que devuelva a



El dictador Francisco Franco saluda a Felipe de Borbón en presencia de su padre. Pazo de Meirás (A Coruña), agosto de 1975.



El rey Alfonso XIII posa con el primer Directorio Militar. En primera fila, de izq. a dcha., el general Primo de Rivera, Alfonso XIII y el general Cavalanti. Septiembre de 1923



Símpatizante republicana con el gorro frigio durante la celebración por la proclamación de la República en las calles de Barcelona. 14 de abril de 1931.

la monarquía al lugar que realmente ha ocupado en las etapas más recientes de nuestro pasado, más allá de las campañas mediáticas desaforadamente laudatorias como las que, nuevamente, nos vemos obligados a presenciar. Es el momento de replantear con ojos nuevos —porque la realidad de nuestros días lo reclama— lo que fue el proceso de la transición post-franquista, arrumbando con las visiones canónicas idealizadoras sin por ello incurrir en el error de edificar nuevos mitos en sentido contrario. Es preciso reabrir el debate sobre la función precisa de la figura del monarca antes, en y después de los años cruciales del cambio político de entonces, en circunstancias y en episodios diversos, desmitificando la imagen propagandística del rey como piloto del cambio (frente a un pueblo al parecer inerte y esperando a su salvador) o garante último y casi único de la democracia (como en el aún controvertido episodio del 23-F). Necesitamos, por salud democrática, discutir en profundidad sobre el protagonismo de la sociedad civil, de los grupos políticos y de las fuerzas populares en ese proceso. En ese orden de cosas, nuestra Sección de Historia está ya preparando un amplio congreso dedicado al papel de los comunistas en la Transición, que, obviamente, abordará además cuestiones que van más allá del propio PCE y sus aledaños, y que tienen que ver con la interpretación del proceso en su conjunto.

Para una reconstrucción histórica solvente y ajustada de nuestro pasado más próximo, es imprescindible, desde luego, salir del círculo de la propaganda interesada, pero también continuar ampliando nuestros conocimientos mediante la investigación seria y rigurosa, que entre otras cosas requiere una consulta lo más completa posible de las fuentes y documentos. En ese sentido, no podemos dejar de saludar la reciente iniciativa de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense denunciando las dificultades de acceso a los archivos (limitaciones de consulta, documentación reservada, privatización de fondos en manos de los herederos de perso-

najes del régimen anterior, etc.), y queremos manifestar nuestra más amplia disposición a colaborar en el *Libro Blanco* que, sobre ese particular, se propone elaborar. Investigar requiere libertad, y la primera libertad —antes de la fundamental de divulgar los hallazgos de la investigación sin cortapisas— es el poder acceder las fuentes que nos permitan esclarecer la verdad de los hechos, incluyendo papeles «clasificados» sobre episodios del franquismo, la transición o el 23-F.

En estos momentos en que acaba de producirse el «cambio en la continuidad» que pretende representar la monarquía, sin que, una vez mas, la ciudadanía vaya a ser consultada, reafirmamos como historiadores nuestro compromiso de continuar trabajando por una historia veraz y a la vez comprometida, que sirva a la ciudadanía para juzgar críticamente el pasado y contribuya a la reflexión colectiva para buscar una salida al agotamiento del régimen de la «monarquía reinstaurada» del 78 y a la profunda crisis social que vive nuestro país. Y nuestra historia no puede ser sino desacralizadora con oropeles e instituciones; desmitificadora de dioses, reyes y tribunos; instrumento al servicio de la mayoría social y —por qué no decirlo— en sintonía con los valores profundos de convivencia y civilidad que la república representa.



Representantes políticos junto a Juan Carlos I tras el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. De izq. a dcha.: Santiago Carrillo, Lan delino Lavilla, Adolfo Suárez, Juan Carlos I, Felipe González y Manuel Fraga.

## Sección de Historia de la FIM